

# AGENDA GLOBAL

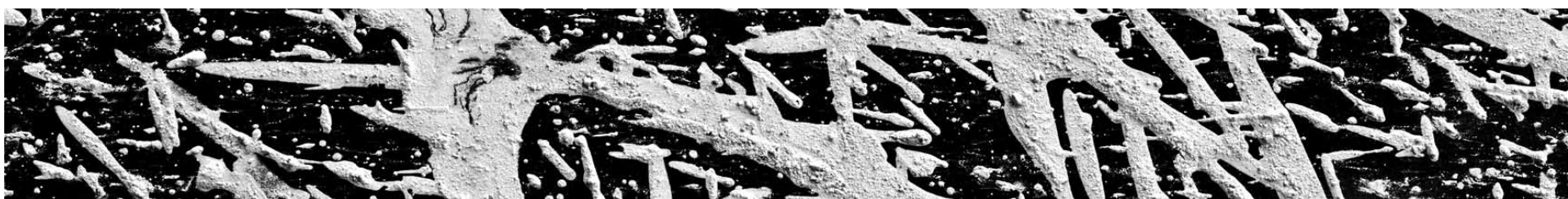
Montevideo Uruguay - Jueves 20 de agosto de 2009 - N° 115 - Distribuido con *la diaria*



**TWN**

Third World Network

- Bases militares en Colombia
- Perú: sin resultados diálogo entre gobierno e indígenas
- Proteccionismo comercial y cambio climático



Ahora que el desempleo golpea con fuerza a millones de personas en Estados Unidos, las discusiones acerca de su impacto son de interés nacional. Aparte de las medidas convencionales, como el nivel del desempleo, la tasa de inflación y los salarios, el economista Arthur Okun creó en los años setenta el Índice de la Miseria, que resulta de sumar el índice de desempleo y el nivel de inflación.

Así, una combinación de inflación creciente y un mayor número de desempleados implica un deterioro de la actividad económica y la consecuente alza del Índice de Miseria.

A junio del 2009, el Índice de Miseria está en 8,07, ya que el desempleo está en 9,5 y la inflación de ese mes fue negativa en -1,43 por ciento ([www.miseryindex.us](http://www.miseryindex.us)). El punto más alto del Índice de Miseria se dio en junio de 1980, con 21,98 por ciento, y el más bajo en julio de 1953 con 2,97 por ciento.

Sin embargo, hay muchas críticas al Índice de Miseria, ya que, de un lado, la tasa de desempleo sólo toma en cuenta una fracción de los desempleados y, de otro, porque les da una menor importancia que la debida a los precios de los alimentos y de la gasolina.

Por eso, el *Huffington Post*, diario virtual en Internet, ha creado el Índice de la Miseria Real, que considera cuatro nuevos indicadores: morosidad en las tarjetas de crédito, precios de las casas, donaciones de comida del gobierno (programa de *food stamps*) y personas que no pueden pagar sus créditos hipotecarios. (Aparte de este nuevo Índice de la Miseria Real, el economista Anwar Shaikh elaboró hace un par de años el Índice de las Vastas Mayorías, que toma en cuenta la distribución del ingreso excluyendo al veinte por ciento más rico de la población. Ver recuadro.)

En los indicadores “antiguos”, continúa el alza de precios de la

## Índice de la Miseria Real: desempleo y food stamps

Humberto Campodónico

gasolina, los alimentos y bebidas y el costo de las medicinas. En cuanto al desempleo, el Índice de la Miseria Real toma en cuenta el Índice U-6 elaborado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (incluye a los desempleados a tiempo parcial y a los “desalentados” que no están buscando trabajo) que actualmente está en 16,3 por ciento y no en 9,5 por ciento.

Cada uno de estos ítems tiene una ponderación similar. (HC, “Desempleo en Estados Unidos: U3 no es igual a U6”, *Agenda Global* N° 105, 10 de junio de 2009.)

El *Huffington Post* ha calculado el Índice de la Miseria Real desde 1991 y se aprecia que, en todos los casos, siempre ha sido superior al Índice de la Miseria de Okun. Pero la diferencia entre ambos comienza a abrirse como boca de cocodrilo desde el 2007, porque el Índice de la Miseria Real se triplica, pasando de 10,9 a 29,9 a junio del 2009, mientras que el Índice de la Miseria se mantiene más o menos constante y, en junio de 2009, está en 8,1

El indicador que más ha contribuido al alza del Índice de la Miseria Real es la tasa de desempleo

U6, que afecta al 16,3 por ciento de los 154 millones de norteamericanos en edad de trabajar.

Le sigue el programa de ayuda alimentaria (*food stamps*), que en junio del 2009 marcó un récord con 33,2 millones de personas (5,6 millones de personas más que el año pasado). Dice SNAP (Programa Suplementario de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos) que uno de cada nueve norteamericanos recibe *food stamps* y que su costo ha venido subiendo y está ahora en 62.000 millones de dólares anuales.

Para concluir, la actual crisis económica ha hecho que se eleve el desempleo, lo que ha acentuado el uso de *food stamps*, llevando el número total de pobres en Estados Unidos a treinta y ocho millones. Añadamos que, si bien la recesión podría tocar fondo en algún momento antes de fin de año, eso no significa que se venga una reactivación fuerte que reduzca el desempleo.

Todo lo cual, como dice Nouriel Roubini (profesor de Economía de la Universidad de Nueva York), hará que la gente de a pie en Estados Unidos “siga pensando que estamos en recesión, aunque ya no lo estemos”. ■

Humberto Campodónico es ingeniero y economista peruano.

Este artículo se publicó en el diario *La República* de Lima, el 12 de agosto de 2009.

**Índice de Ingreso de las Vastas Mayorías.** El economista Anwar Shaikh, de la Universidad New School de Nueva York, propuso una nueva forma de medición de los niveles de desarrollo, el Índice de Ingreso de las Vastas Mayorías, como un instrumento adicional a los ya existentes, el PBI per cápita y el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dice Shaikh que el PBI per cápita (que se calcula dividiendo el PBI de un país entre su número de habitantes) es un promedio simple que no toma en cuenta las desigualdades en la distribución del ingreso. (El Índice de Desarrollo Humano lo corrige en parte, ya que combina el PBI per cápita con la esperanza de vida y el grado de educación de las personas.)

Por eso ha elaborado un Índice que tome en cuenta el PBI per cápita a la vez que la distribución del ingreso.

El Índice de Ingreso de las Vastas Mayorías calcula el ingreso promedio del ochenta por ciento de la población más pobre de los países, utilizando la distribución del ingreso (coeficiente Gini) junto al PBI per cápita.

Al tomar en cuenta la distribución del ingreso excluyendo al veinte por ciento más rico de la población, el resultado es que el ingreso per cápita –del ochenta por ciento– disminuye fuertemente, pues ya no se toman en cuenta los grandes ingresos del veinte por ciento más rico. (HC, “Ricos y pobres globales”, *La República*, 27 de abril de 2009.) ■

La instalación de bases militares estadounidenses en Colombia preocupa en la región y ha causado controversia. Los mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) convocaron a un diálogo a los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, y Barack Obama, de Estados Unidos, y coincidieron en que Bogotá y Washington deberían aclarar los alcances de esa cooperación.

Las negociaciones sobre el uso de bases colombianas por personal militar estadounidense en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo concluyeron el viernes 14 de agosto. “El texto acordado pasa ahora a la revisión técnica por las instancias gubernamentales de cada país para su posterior firma”, informó el gobierno colombiano. Una vez firmado el acuerdo, Estados Unidos tendrá acceso a cinco bases aéreas en diferentes regiones de Colombia y a dos marítimas, una en el Pacífico y otra en el Caribe.

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, pidió que no se sentara a nadie en el banquillo de los acusados, pero el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró de vital importancia que este tema, que se debatió fuera del ámbito protocolar en la cumbre de la Unasur en Quito el lunes 10 de agosto, fuera analizado con detenimiento. Por ello solicitó a la Presidencia Pro Témpore de la Unasur, a cargo de Ecuador, que extienda una invitación a Obama con el fin de que analice el caso personalmente y no envíe a delegados del Departamento de Estado. A esto se sumó la demanda de Venezuela de que se pida al gobierno de Estados Unidos explicaciones sobre la intervención en la región de la IV Flota Armada, que volvió a operar en 2008, después de cincuenta y ocho años de su disolución.

CUMBRE DE LA UNASUR EN BARILOCHE

# Las bases militares en Colombia

El tema de la instalación de bases de Estados Unidos en Colombia, que se debatió informalmente en la cumbre de la Unasur celebrada en Quito el 10 de agosto, será tratado en la reunión extraordinaria del bloque el día 28 en la ciudad argentina de Bariloche, ahora con la presencia del presidente colombiano Álvaro Uribe ausente en la cita de la capital ecuatoriana.

Mientras tanto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pidió evitar la beligerancia y se comprometió a invitar personalmente al mandatario colombiano para que no se sienta relegado de la Unasur, así como a organizar el encuentro de mandatarios de la región en su país, que tendrá lugar el 28 de agosto en Bariloche.

LULA CONSIDERÓ DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL TEMA DE LAS BASES MILITARES FUERA ANALIZADO CON DETENIMIENTO.

Antes de emprender su visita a Venezuela, funcionarios de la comitiva oficial argentina informaron a la prensa que Fernández propuso a sus pares que la reunión no se realizara en Buenos Aires, sino en Bariloche, por la tranquilidad que

ofrece esa zona turística de la Patagonia.

Éste fue el preámbulo en el que se desarrolló la Cumbre de la Unasur en Quito y a partir de la cual surgieron nuevos visos de integración para apaciguar las relaciones diplomáticas entre Colombia, Venezuela y Ecuador. No obstante, el tema pasó de la agenda de cancilleres y ministros a la presidencial, dejando en espera la reunión del Consejo de Defensa Sudamericano prevista para el 24 de agosto, en donde se iba a abordar el tema. (La cancillería ecuatoriana y el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, confirmaron el 13 de agosto que la reunión de ministros de Defensa no se realizará en esa fecha).

Este cambio del cronograma de actividades de la Unasur dio pie a que las cancillerías de los doce países miembros coordinen agendas por separado, una con Uribe y otra con Obama.

La idea es escuchar primero las explicaciones del presidente colombiano, como integrante de la Unasur, sobre la negociación que

mantiene su país con Estados Unidos, en relación con la instalación de bases militares.

Con posterioridad a este encuentro previsto para el 28 de agosto en Bariloche, los mandatarios contarán con un panorama más claro de la posición de Colombia y acudirán a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a la que asistirá el mandatario estadounidense. Además del tema de las bases militares, a Obama se le solicitará que señale los alcances de la intervención en la región de la IV Flota Armada.

Emilio Izquierdo, coordinador de la Unasur de la cancillería de Ecuador, que tiene la misión de ayudar en la organización de la reunión de jefes de Estado, dijo que aún no está claro cuándo exactamente se desarrollará el encuentro con Obama. “Sobre ese detalle no tengo todavía nada que decir”, expresó.

No obstante, el gobierno venezolano consideró que el diálogo con Obama podría tener lugar en setiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Izquierdo comentó que se continúa con la coordinación de las agendas de los mandatarios para la reunión en Argentina, que no pasará de este mes de agosto dada la relevancia que tiene la implementación de las bases militares. Justificó la preocupación, principalmente de los países vecinos de Colombia, como Venezuela y Ecuador, y subrayó que esta noticia concita la atención de la comunidad internacional.

Ecuador tiene la Secretaría Pro Témpore de la Unasur, pero la invitación a Uribe la hará la presidenta argentina, debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá a raíz del bombardeo de Angostura en marzo de 2008. Pero Izquierdo fue enfático al afirmar que “es una reunión en la que necesariamente tienen que estar los doce países de la Unasur”.

El gobierno de Colombia confirmó la asistencia del presidente Uribe a la reunión extraordinaria de la Unasur en la que se abordará el tema del uso de bases colombianas por parte de militares de Estados Unidos, anunció en un comunicado el portavoz de la Presidencia, César Mauricio Velásquez. La agenda de esa cumbre “será diversa y no implica condición para el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos a fin de enfrentar con más éxito el narcotráfico y el terrorismo”, señala el comunicado.

Uribe estará acompañado en Argentina por el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, ambos ausentes en la cumbre de Quito del 10 de agosto. ■

Este artículo está basado en el de Verónica Galarza “Bariloche, primera parada de la Unasur”, publicado en el diario ecuatoriano *El Telégrafo*, el 14 de agosto de 2009.

**Grandes contradicciones internacionales.** “El presidente [de Colombia, Álvaro] Uribe ha emprendido una serie de viajes para dar explicaciones a sus vecinos (Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) con la idea de que esto bastará para aplacar a la gallería, que se agitó en la región por el acuerdo que permitirá a Estados Unidos el uso de siete bases militares, que supuestamente compensaría el cierre de la base ecuatoriana de Manta”, dice Gonzalo Martínez Corbalá en una columna publicada el 17 de agosto en el diario mexicano *La Jornada*.

Venezuela y Ecuador fueron los países que más violentamente reaccionaron, anunciando que esto propiciaría un de-sembarco militar de Estados Unidos.

“Nosotros los mexicanos –por aquello de que el que se quemó con leche hasta al jocoque le sopla– también vemos con preocupación la instalación de nuevas bases

estadounidenses en Colombia, habida cuenta de que los propósitos que se persiguen, según Uribe, son muy parecidos a los problemas que nosotros tenemos en nuestro país, excepción hecha de las guerrillas”, sostiene Martínez Corbalá.

“Aunque el presidente Hugo Chávez afirmó que no gastaría ni un centavo en armas, señaló que las circunstancias lo obligan, refiriéndose implícitamente a las siete bases militares estadounidenses en Colombia, y que son razón suficiente para signar un nuevo pacto de rearme con Rusia, el cual consiste en ‘un conjunto de acuerdos sobre armamento para incrementar nuestra capacidad operativa, la de nuestros sistemas defensivos de nuestra fuerza aérea’, informó durante una entrevista con la prensa extranjera el 1 de julio en el Palacio de Miraflores”, dice el analista mexicano. ■





El diálogo entre los pueblos indígenas amazónicos y el gobierno de Alan García a través de las cuatro mesas instaladas es ahora, según el testimonio de los apus (jefes en quechua), casi un monólogo.

Luego de la juramentación del gabinete, presidido por Javier Velásquez Quesquén, ningún ministro ha asomado ni siquiera por cortesía por las mesas. Los apus esperaban que el jefe del gabinete hiciera alguna alusión a las mesas de diálogo en su discurso en el Congreso como señal de que el gobierno honrará la palabra empeñada de atender y resolver las legítimas demandas indígenas andino-amazónicas. Pero nada.

En vez de algún gesto y una palabra de buena voluntad, lo que los pueblos indígenas han sentido, visto y escuchado del gobierno de García es la versión de parte del régimen sobre los sucesos de Bagua, plagada de inexactitudes y de interpretaciones antojadizas, expuestos por el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, en Ginebra, el anuncio de que los indígenas presos en Chachapoyas serán trasladados a Lima, el acoso y la persecución policial y judicial sin tregua.

Y como si toda esta hostilidad y expresión de intolerancia y racismo no fuera suficiente, el presidente Perúpetro (empresa estatal, encargada de promover la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Perú), Daniel Saba, el mismo que negó la existencia de los indígenas no contactados porque

PERÚ

# Diálogo entre gobierno e indígenas es un monólogo

Roger Rumrill

no conocía a ninguno de ellos, acaba de informar que en el próximo mes de octubre se reanudará la lotización petrolera de la Amazonia.

De acuerdo a Saba, julio era el mes en que se debían reanudar las licitaciones. Pero la empresa ha estado modificando los diseños y las bases de los contratos y esperando que la situación internacional mejore para que haya una mayor participación de inversionistas.

PERÚPETRO ACABA DE INFORMAR QUE EN OCTUBRE SE REANUDARÁ LA LOTIZACIÓN PETROLERA DE LA AMAZONIA.

La realidad es que la situación económica internacional está peor que nunca y los precios del barril de petróleo siguen estancados. Lo que no ha querido decir Saba es que la

licitación se suspendió por la lucha indígena de los meses de mayo y junio en la Amazonia.

Saba cree que ya todo está resuelto con las mesas de diálogo y que ya es tiempo de reanudar la entrega de la Amazonia a las multinacionales petroleras como lo ha venido haciendo el gobierno de García: superponiendo los lotes a los territorios indígenas, a áreas de conservación de la biodiversidad, a la plaza de armas de Iquitos (capital del departamento amazónico de Loreto, en el noreste de Perú), a la fortaleza de Kuélap, a provincias y distritos.

Para los amazónicos, el anuncio de Saba es una provocación. Por eso ya empiezan a hablar de un “Plan B” de resistencia pacífica. Los tambores y manguarés de una segunda resistencia empiezan a sonar a lo largo y ancho de la inmensa, hermosa Amazonia. ■

Roger Rumrill es escritor peruano experto en temas amazónicos. Esta columna se publicó en el diario *La Primera* de Lima, el 17 de agosto de 2009.

## SUNS

South-North Development Monitor

● **China y las normas sobre publicaciones y productos audiovisuales de la OMC.** Un panel de controversia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) determinó el 12 de agosto que China ha actuado en contradicción con las disposiciones de su Protocolo de Adhesión, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y el GATT de 1994 relativas a las medidas que afecten a los derechos de tráfico y la distribución para determinados servicios de publicaciones y productos audiovisuales.

El reclamo contra China fue presentado por Estados Unidos y los productos implicados son películas importadas para salas de cine, los productos audiovisuales de entretenimiento para el hogar (cintas de video y DVD, y grabaciones de sonido), y publicaciones (libros, revistas, periódicos y publicaciones electrónicas). (14/8/2009) ■

● **Clima: choque sobre “visión compartida”.** En la reunión del grupo informal sobre “visión compartida” celebrada el 12 de agosto en Bonn en el marco del Grupo de trabajo especial sobre cooperación a largo plazo en el marco del Plan de Acción de Bali de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el G-77 y China hizo una larga presentación de sus puntos de vista sobre el tema y reclamó un enfoque holístico. (14/8/2009) ■

● **El Sur pide ampliación de fondos.** Los países en desarrollo pidieron una ampliación de los recursos financieros de los países desarrollados para hacer frente al cambio climático en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El Grupo de África, representado por Sudáfrica, dijo que no aceptaría un compromiso financiero inferior al uno por ciento del PIB mundial y dijo que si se lo compara con las sumas previstas por los países desarrollados para sus paquetes de estímulo económico, su propuesta era razonable para una crisis humanitaria mundial como el cambio climático. (14/8/2009) ■

● **Medidas comerciales unilaterales para proteger el clima violan tratados.** Los países en desarrollo pidieron a los países desarrollados que no recurrieran a ningún tipo de medidas unilaterales contra la importación de sus bienes y servicios por razones de protección del clima porque dichas medidas violan las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en una reunión celebrada en Bonn el 12 de agosto. (14/8/2009) ■

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en: <http://www.sunsonline.org>

● **Los beneficiados de siempre.** El FMI aprobó el 7 de agosto la asignación, por única vez, de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 250.000 millones de dólares. La medida surge de una resolución del G-20 aprobada en abril en Londres, con el objetivo de inyectar liquidez al sistema económico mundial complementando las reservas de divisas de los países miembros. Al distribuirse dicha asignación según las cuotas en la institución financiera y no la necesidad de los miembros, una vez más los beneficiados serán los países desarrollados.

Según el criterio seleccionado para esta asignación, sólo 100.000 millones de dólares irán a los países en desarrollo.

Estados Unidos recibirá 42.600 millones de dólares: Japón, 15.000 millones; China, 9.000 millones; Rusia, 6.600 millones; India, 4.500 millones; Brasil, cerca de 3.000 millones; Sudáfrica, 2.000 millones; Turquía, 1.300 millones, y México, 3.600 millones. África recibirá unos 10.000 millones, menos del cinco por ciento del total de la emisión, mientras que los países del G-7 serán recompensados con más del cuarenta y cinco por ciento.

El valor de los DEG se calcula por el promedio de una canasta de las cuatro mayores monedas del mundo (el dólar, la libra esterlina, el euro y el yen) de acuerdo a una fórmula ponderada que es revisada cada cinco años para ase-

gurar que se represente la importancia relativa de cada una de ellas. Los países que decidan utilizar sus DEG podrán cambiarlos por monedas duras (dólares, yenes, euros o libras), debiendo pagar por ello una tasa de interés anual.

Las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado sobre la asignación de DEG en respuesta a las resoluciones del G-20, el G-8 y la Conferencia de la ONU, a fin de discutir la manera de hacer de los DEG una unidad que pueda ser intercambiada libremente entre los países y utilizada para una amplia gama de obligaciones.

Una asignación especial para todos los países en desarrollo o países de bajos ingresos es posible sólo si se aprueba una enmienda en el Acuerdo Constitutivo del FMI. La urgencia que significa esta crisis para muchos países en desarrollo debería ser motivo suficiente para una enmienda que permita una asignación especial para aquellos que más lo necesitan. Mientras que los costos de la conversión de los DEG -potencialmente caros- tendrían que ser eliminadas para los países más vulnerables, o subvencionados por otros fondos del FMI, como los beneficios obtenidos de la venta de oro de la institución. ■

Monitor de Instituciones Financieras Internacionales en América Latina: <http://ifis.choike.org/esp>

Un tema nuevo surgió en las negociaciones de Bonn: el proteccionismo comercial en nombre del cambio climático. Medidas recientes adoptadas por países desarrollados imponen cargas o impuestos a bienes importados provenientes de países en desarrollo con el argumento de que éstos no están haciendo suficientes esfuerzos en materia climática.

Un proyecto de ley sobre clima aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (ley Waxman-Markey), que contiene el referido mecanismo de protección comercial, originó la preocupación de los países en desarrollo, que lo perciben como una tentativa de los países ricos de evadir su obligación de asistirlos –mediante financiamiento y transferencia de tecnología– y, en cambio, les imponen multas.

El Grupo de los 77 y China dio la alarma en una declaración. Los países desarrollados están diseñando medidas que tienen efectos de distorsión del comercio –en especial para ajustar los impuestos fronterizos, aranceles por carbono y etiquetas de huella de carbono– y restringen las

# Cambio climático y proteccionismo comercial

Martin Khor

exportaciones de los países del Sur, obstaculizando su desarrollo.

India y China propusieron nuevos párrafos en el texto para la Conferencia de diciembre en Copenhague en cuanto a que los países desarrollados no recurrirán a medidas unilaterales contra bienes y servicios importados de los países en desarrollo con el argumento de que se trata de una protección del clima. Esas medidas unilaterales violarían los principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, advirtió India, y citó cuatro cláusulas que resultarían lesionadas.

La Secretaría de la Convención también hizo circular un documento que revela en cuánto está dispuesto a reducir sus emisiones cada país desarrollado, según sus propias declaraciones públicas. Si se excluye a Estados Unidos, la reducción global sería sólo de trece a veinte por ciento para 2020, comparada con los niveles de 1990. Si se lo incluye, la cifra sería aún más baja.

Esto está muy por debajo de la reducción de emisiones que numerosos grupos de países en desarrollo reclaman a los países desarrollados y que se ubica, como mínimo, entre cuarenta y cuarenta y nueve por ciento para 2020, con respecto al nivel de 1990. También está por debajo del veinticinco al cuarenta por ciento mencionado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y del treinta por ciento al que se comprometería la Unión Europea si otros países desarrollados hicieran lo mismo.

Frente a las nuevas medidas de protección comercial, a los bajos objetivos de reducción de emisiones fijados por los países desarrollados y sin nada a la vista en materia de financiamiento y transferencia de tecnología, la situación no se presenta para nada auspiciosa. ■

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra. Traducción: Raquel Núñez Mutter.

## Agua: recurso vital y derecho humano

Thalif Deen

La creciente comercialización del agua y la gran influencia de las empresas embotelladoras obliga a reglamentar la gestión de ese recurso vital para que su acceso sea un derecho fundamental. “Necesitamos un acuerdo o tratado internacional sobre el derecho de acceso al agua a fin de dejar sentado de una vez por todas que no se le puede negar a ninguna persona porque no lo pueda pagar”, subrayó la experta canadiense Maude Barlow, asesora del presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto. “Tenemos que proteger su disponibilidad en tanto que derecho” fundamental.

La Comisión de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, es quizá el órgano más indicado para proponer un tratado de esas características, añadió Barlow. Pero lo mejor, sostuvo, sería que fuera ratificado por los 192 miembros de la Asamblea General. “Necesitamos más que una declaración de la ONU. Se requiere de un plan de acción para la Asamblea General”.

Alrededor de 880 millones de personas, la mayoría en los países en desarrollo, carecen de agua potable, según la ONU, cifra que puede llegar a 4.000 millones en 2030, la mayoría en China y Asia meridional.

El mercado mundial de agua asciende a unos 250.000 millones de dólares, y puede llegar a los 660.000 millones en 2020, según un estudio realizado en marzo por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

El no gubernamental Consejo de Canadienses, presidido por Barlow, trabaja para que el derecho a disponer de agua sea incorporado en las constituciones de los países.

Uruguay es de los pocos países donde se aprobó una reforma constitucional, mediante una consulta popular realizada en 2004, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano y un servicio público que debe brindarse sin fines de lucro. La organización colombiana Ecofundo ya recogió dos millones de firmas para impulsar un referendo de similares características. (IPS) ■

**Chow Kok Kee.** La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rindió homenaje a Chow Kok Kee, un ciudadano malasio que fue uno de sus mayores expertos y arquitectos. El 10 de agosto, unas mil personas congregadas en el vestíbulo del edificio donde tienen lugar las negociaciones en Bonn tributaron un homenaje a Chow, fallecido el día anterior de un ataque al corazón en su casa de Kuala Lumpur.

Chow fue un formidable negociador. Encabezó la delegación de Malasia en la Convención, presidió su Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y fue nombrado Presidente del Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología en 2007.

“Su muerte repentina es un duro golpe para los círculos que trabajan en cambio climático”, dijo Ivo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención.

En mi caso personal, Chow contribuyó en gran medida a mi interés en las negociaciones sobre clima, así como al conocimiento que tengo en el tema. Extremadamente generoso para transmitir todo lo que sabía, recuerdo que hace tres años me explicó los elementos centrales de la Convención que la hacían “amigable” para los países en desarrollo, especialmente el Artículo 4.7: el grado de acción que adopten los países en desarrollo depende del grado en que los países desarrollados cumplan sus compromisos para con ellos relativos a financiamiento y transferencia de tecnología.

Este artículo, que reconoce la responsabilidad de los países desarrollados en la medida en que causaron la mayoría de las emisiones que existen en la atmósfera, era el corazón de la Convención para Chow. ■ MK

## AGENDA GLOBAL

**Redactor responsable:** Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez.

(c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. [www.item.org.uy](http://www.item.org.uy) / [item@item.org.uy](mailto:item@item.org.uy)

